

Concejala Marcela Leitchle critica desidia administrativa del Ejecutivo:

“La salud no puede depender de decisiones tardías”

- La autoridad comunal alertó sobre el impacto del cierre temporal del servicio de urgencia y la desvinculación de funcionarios, apuntando a una priorización de la retórica sobre la gestión regional.

Fernando Cumare
fcumare@elpinguino.com

EP PÁGINA WEB

La reciente crisis financiera expuesta en el Concejo Municipal de Punta Arenas, que derivó en la aprobación de una subvención de emergencia para la Corporación Municipal, ha generado una dura reacción de la concejala y presidenta de la comisión de Salud, Marcela Leitchle.

La autoridad lamentó el cierre temporal del SAPU 18 de Septiembre -medida tomada ante la falta de 45 millones de pesos mensuales para su operación- y enfilar baterías en contra del ejecutivo, señalando que la situación “es una muestra clara del abandono del Gobierno de Gabriel Boric hacia la atención primaria de salud en regiones”.

Según Leitchle, es inadmisible que la operatividad de un recinto que brinda seguridad a miles de familias se vea interrumpida por la burocracia centralista, agregando que “resulta inaceptable que,

por falta de transferencia de recursos ministeriales, se deba cerrar un dispositivo de urgencia que entrega seguridad y atención oportuna a los vecinos”.

Impacto en la continuidad asistencial

El escenario actual, marcado por el retraso sistemático de los fondos que habitualmente el Ministerio de Salud transfiere recién hacia marzo o abril, obliga a la red asistencial local a operar bajo una precariedad extrema.

Resulta inaceptable que, por falta de transferencia de recursos ministeriales, se deba cerrar un dispositivo de urgencia que entrega seguridad y atención oportuna a los vecinos”.

Para la concejala Leitchle, existe una desconexión profunda entre el discurso oficial y la realidad de las comunas, afirmando que “mientras el discurso del gobierno habla de fortalecer la salud pública, en la práctica son las comunas las que pagan el costo de la desidia, improvisando ‘redistribuciones’ que solo parchean un problema estructural generado en Santiago”.

Esta situación se traduce también en la pérdida de personal calificado, tras el término de contrato de 37 funcionarios el pasado 31 de diciembre, lo que a juicio de la autoridad impacta directamente en la calidad de la atención al “precariar aún más un sistema ya sobrecargado”.

Déficit en programas críticos

La problemática no se limita únicamente al servicio de urgencias, sino que se extiende a programas vitales como “Punta Arenas te cuida”, el cual enfrenta un déficit de 320 millones de pesos respecto de lo solicita-

CEDIDA



Ante el cierre temporal del SAPU, la concejala apunta al ejecutivo: “Es una muestra clara del abandono del Gobierno de Gabriel Boric hacia la APS”.

tado para atender a pacientes crónicos.

Ante esto, Leitchle fue enfática en que “la salud no puede depender de decisiones tardías ni de excusas administrativas: cuando el Estado falla en financiar a tiempo, son las personas las que quedan expuestas”.

La concejala advirtió que el desplazamiento de los 18.000 usuarios del sector hacia otros centros como el SAPU Damíanovic o el Cesfam Carlos Ibáñez solo aumentará la presión sobre una red ya debilitada por la falta de criterios de urgencia en la distribución del presupuesto.

¿Cuáles son las prioridades?

Finalmente, la presidenta de la comisión de Salud lamentó que este cierre temporal no sea un hecho aislado, sino la consecuencia de una política que desestima las necesidades territoriales. “Este cierre es la consecuencia directa de un gobierno que prioriza la retórica por sobre la gestión y que demuestra, una vez más, que las regiones no están en el centro de sus decisiones”, concluyó Leitchle.

Sus declaraciones refuerzan la crítica ante una escala de prioridades cuestionable,

donde mientras el sistema de urgencias languidece por falta de fondos, otras áreas como cultura registran excedentes sin ejecutar, evidenciando una crisis de gestión que hoy golpea el acceso básico a la atención médica en Magallanes.

Mientras el discurso del gobierno habla de fortalecer la salud pública, en la práctica son las comunas las que pagan el costo de la desidia, improvisando ‘redistribuciones’ que solo parchean un problema estructural generado en Santiago”.